

Chile renueva su democracia

Wolter, Matilde

Matilde Wolter: periodista, ex-directora en Ecuador de la Agencia Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS), y actual redactora de la Agencia EFE en Santiago de Chile.

A pocas semanas de las segundas elecciones presidenciales en democracia - tras el largo paréntesis autoritario del régimen pinochetista - el escenario político chileno aparece marcado a fuego por dos fechas claves que han signado este año las dos crisis más graves del gobierno y de las no resueltas relaciones cívico-militares: el 28 de mayo, día del llamado «boinazo» pinochetista y el 11 de septiembre, cuando la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado dejó un saldo de dos muertos, los primeros de la democracia recuperada.

Los sucesos ocurridos en Chile entre estas dos fechas y tras tres años y medio en los que se fue construyendo laboriosamente un sólido tejido democrático basado en amplios consensos y elogiado profusamente en el exterior, demostraron que las heridas aún están abiertas, que la reconciliación no se afianza y no lo hará mientras quede como asignatura pendiente el tema de las violaciones a los derechos humanos.

Todavía no se conoce el paradero de los cerca de 1.100 detenidos políticos desaparecidos que dejó el régimen militar y muchos de los símbolos de ese pasado permanecen obstinadamente como el festivo para el aniversario del golpe militar. Augusto Pinochet sigue siendo el comandante en jefe del Ejército y el Presidente de la República no puede designar a sus comandantes en jefe ni configurar, con los resguardos del caso, los cuadros institucionales de las fuerzas armadas y de la policía uniformada de Carabineros.

Gran parte de las leyes de amarre del régimen anterior continúan vigentes y los senadores designados por el gobierno del general Pinochet (nueve) siguen en funciones distorsionando la composición del Senado. A este cuadro se suma que no todos han hecho sus gestos de contrición o de reparación, menos aún los sectores castrenses, involucrados en cerca de 200 juicios sobre violaciones a los derechos humanos que se ventilan en los tribunales de justicia. La presión militar del 28 de mayo, en la que Pinochet sacó a sus boinas negras a la calle en tenida de combate, dejaron en evidencia con brutal claridad la fragilidad de las relaciones cívico-militares y la

gravitación que el ex-dictador aún mantiene sobre el escenario político chileno, como lo había señalado, quizás premonitoriamente, el propio presidente Patricio Aylwin en su mensaje anual al Congreso el 21 de mayo, siete días antes del movimiento militar, cuando llamó a consolidar una democracia «sin tutores» y a eliminar «los enclaves autoritarios» del pasado régimen militar.

Las soluciones que el Ejecutivo buscó a la crisis dieron paso a la primera fisura seria en la hasta entonces granítica alianza gobiernista. La mal llamada «ley Aylwin» propuesta en agosto por el presidente para agilizar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, sería el detonante. La mencionada ley, cuya presentación fue calificada como un gran «error político» del gobierno, proponía en el marco de la doctrina gubernamental de la «justicia posible» la designación de jueces especiales que también podían ser militares y garantías de secreto para los autores e inculcados en estos casos. El proyecto fue rechazado por los familiares de las víctimas, que consideraron que consagraba la impunidad, también por los organismos de derechos humanos y por los socialistas. Como explicó un analista «votar a favor del proyecto de ley tal cual estaba redactado era más de lo que se podía exigir a la izquierda», conglomerado que, como dijo un dirigente, «aún carga sus muertos». Los socialistas apelaron a distintas sensibilidades mientras desde la Democracia Cristiana, el partido del presidente Aylwin, se escucharon reproches y acusaciones de oportunismo electoral. Lo que siguió a este hecho fue generando confusión en el gobierno, creciente desorden, falta de consenso, y dio paso a la primera disidencia seria al interior de la coalición gubernamental.

En este contexto amenazante, el Ejecutivo decidió al fin retirar el proyecto del Parlamento y la crisis empezó a superarse, al menos formalmente, al interior de la coalición gobernante mientras el Ejército mostró cierto alivio pues prefería el camino de la justicia ordinaria, a arriesgarse a una ley modificada por manos socialistas.

Las dificultades de la convivencia en época electoral

Según algunos analistas ligados a la Democracia Cristiana, el episodio de la «ley Aylwin» abrió amplias brechas de confianza respecto de los objetivos de la transición política. Según Ascanio Cavallo, la Concertación de Partidos por la Democracia ha funcionado en el Gobierno sobre la base de una transversalidad partidaria «que en otros casos y en otros años impidió que los aliados se sintieran amparados por cuotas de poder y permitió, en cambio, la sujeción de todos a horizontes y expectativas comunes buscando en cada tema el punto por donde se pudiese trazar la línea transversal, de consenso».

Es conocido en Chile que, con la anuencia del presidente Aylwin, un triunvirato integrado por los ministros secretario general de la Presidencia, Edgardo Boeninger, de Gobierno, Enrique Correa y de Hacienda, Alejandro Foxley, orientó y manejó la creación de consensos en una amplísima gama de materias, cooperando desde las grandes tesis de la transición hasta las tareas más rutinarias del apoyo parlamentario. A las postrimerías del Gobierno y a la luz de varios disensos públicos, se ha hablado de un evidente proceso de disgregación de este «partido transversal» y de la legítima búsqueda de horizontes distintos. El desafío pendiente pasa por estructurar una coalición de nuevo tipo y proyectarla en el nuevo Gobierno, que según señalan todas las encuestas electorales, tendrá nuevamente el sello concertacionista.

En este escenario político, que comenzó el 28 de mayo con el «boinazo» y quedó marcado a fuego el 11 de septiembre, la derecha política se vio derrotada por el peso y las maniobras de los poderes fácticos y se vio obligada a apoyar el pinochetismo, que sigue marcando la pauta y manteniendo la iniciativa del «sector», como les gusta llamarlo. Atravesada por una de las crisis más graves de su reciente historia democrática, fragmentada en divisiones intra y extra partidos, sólo a pocos días de que se cerrara el plazo oficial, la derecha institucional conformó el «Pacto Unión para el Progreso» e inscribió, como es ya tradición en ese conglomerado, la candidatura de un personaje que jugaba por fuera de la contienda interna. La nominación recayó en el senador independiente Arturo Alessandri Bosa, de 69 años, heredero de una familia histórica, sobrino del expresidente liberal Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y nieto del dos veces gobernante Arturo Alessandri Palma. Alessandri deberá disputar, sin embargo, el electorado derechista con el independiente, y populista ex-ministro de Trabajo de Pinochet, José Piñera, que apoyan, por lo demás, muchos seguidores y militantes de la ultraconservadora Unión Democrática Independiente (UDI). De todos modos, la designación de Alessandri inyectó de optimismo a la derecha tradicional, que ya no aspira sólo a reconstituirse sino también a liderar un gran movimiento que le permita asegurar el tercio parlamentario, para mantener su capacidad de veto legislativo.

En los comicios generales del 11 de diciembre de 1993, cerca de 8 millones de chilenos elegirán al sucesor del presidente Aylwin, a 18 senadores y renovarán totalmente la Cámara de Diputados. Alessandri, cuya propaganda asegura que «puede más» porque Chile «quiere más», es el más serio contrincante del Senador demócrata cristiano Eduardo Frei, de 52 años, favorito absoluto en todas las encuestas, con porcentajes que sobrepasan el 51 por ciento, el porcentaje necesario para evitar la segunda vuelta. Eduardo Frei Ruiz Tagle, otrora próspero empresario, es hijo del fallecido presidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y su lema

electoral lo define como «un hombre para los nuevos tiempos». A estos aspirantes al sillón presidencial se suma Cristián Reitze, del Partido Humanista, que se separó hace algunos meses de la coalición gobernante que integran democristianos, socialistas, radicales, socialdemócratas y el Partido por la Democracia (PPD). Otro de los postulantes es el ecologista Manfred Max Neef, cuya candidatura ha crecido vigorosamente en los grupos feministas, ambientalistas e indigenistas y que con la propuesta de conformación de un gran movimiento social, aspira a aglutinar al 5% del electorado. En la oposición de la izquierda comunista aparece la postulación del sacerdote católico Eugenio Pizarro, apoyado por la izquierda extraparlamentaria y el Movimiento de Izquierda Democrático Allendista (MIDA) y que aspira a convertirse en alternativa para los descontentos de la izquierda tradicional.

Estos comicios, los segundos parlamentarios y presidenciales desde que el país retornó a la democracia en marzo de 1990, se verifican en un marco económico exitoso, con un amplio consenso democrático, pero todavía con más de 4 millones de pobres, cuya alusión ha sido recurrente en toda la campaña. En este contexto político y con una economía sólida que sigue creciendo a tasas históricas y alabada en el exterior, entregará en marzo próximo el gobierno el presidente Aylwin. Con toda seguridad, a un correligionario, en lo que es un hecho inédito, al menos en la historia política reciente de Chile. En tiempos de campaña, los equipos de gobierno que miran desde afuera el tejido político, están empeñados ahora en garantizar la continuidad de la Concertación. Enrique Krauss resumió esta preocupación al señalar que ahora «lo importante es que la Concertación llegue a ser un pacto histórico, capaz de proyectarse y darle estabilidad democrática al país por muchos años», el ministro agregó que el próximo gobierno va a ser de continuidad pero también de cambio. Desde el interior de la alianza, todos tienen claro, también, que pese a «las turbulencias» la coalición oficialista no corre riesgos de división. Saben que tienen por delante un nuevo período presidencial y que la forma como resuelvan sus actuales diferencias marcará la calidad y coherencia del gobierno futuro.

El partido transversal ha quedado enterrado y las colectividades políticas se aprestan a jugar un rol más protagónico en el futuro gobierno y a establecer lo que han llamado un «nuevo pacto de gobernalidad». Los socialistas hablan de nuevo trato político, que significa «gobierno de excelencia, suprapartidismo, mayor rol de los partidos y mecanismos de consulta para las diferencias en las decisiones». El punto es que en aquellos temas trascendentales, como el de los derechos humanos, el gobierno debe concordar sus iniciativas con los partidos de la coalición. La «Segunda Concertación» la llama el líder del sector de izquierda de la alianza, Ricardo Lagos.

Una batalla electoral sin dramatismo ni sorpresas

Bajo este panorama político, la campaña electoral entró en su recta final, con mucha apatía y poco interés, originado quizás en que los comicios se avizoran sin sorpresas ni dramatismo, con resultados anunciados, una campaña atrasada, y quizás la más aburrida en los últimos 50 años de vida política del país. Para el director de la Secretaría de Cultura y Comunicaciones, Eugenio Tironi, esto no es motivo de inquietud sino un buen signo ya que no hay expectativas desmesuradas ni voluntad de introducir «cambios dramáticos» en la gestión del Gobierno. «El principal bien que entrega el Gobierno al país es este clima de confianza, de tranquilidad y de optimismo que percibimos a través de las propias campañas presidenciales» subrayó Tironi que aseguró que no hay otro gobierno en la historia chilena y quizás latinoamericana que termine su mandato con tan alto grado de popularidad y aprobación. La última encuesta marcaba más de un 60 por ciento de aceptación ciudadana a la gestión del presidente Aylwin. Los analistas políticos, al explicar la apatía electoral tan ajena a la historia política chilena, han recordado que la revolución en libertad, la vía chilena al socialismo o el dilema democracia o dictadura fueron grandes causas que movilizaron a multitudes. Hoy las opciones son menos dramáticas pero no por ello menos vitales.

El análisis electoral deja en evidencia también que la Concertación goza de un prestigio, de una fuerza electoral, de una organización territorial y de una estrategia mucho más consistente que la oposición. Su eficiente trabajo de gobierno sumado a un candidato presidencial ganador maximizan aún más sus componentes positivos, pero hay factores que morigeran su ventaja. En primer lugar, ha sufrido un leve proceso de dispersión respecto a los comicios de 1989, con la salida del Partido Humanista-Verde, el MAPU y una cerrada oposición comunista.

El bloque conformado por los socialistas y el Partido por la Democracia, en tanto, enfrenta poco halagüenas perspectivas debido a tres factores: por un lado, la relativa buena plantilla de candidatos del comunista MIDA que puede arrebatarle a la izquierda de la Concertación los votos necesarios para obtener un segundo diputado o senador. Por otro lado, está la proyección de una vieja cultura de tendencias socialistas que se expresa en dificultosos acuerdos de mayoría para la presencia en la coalición concertacionista. Según sus propios técnicos electorales, de los 22 diputados que de tiene hoy el bloque, sería un éxito mantener 15 ó 16 en el próximo Parlamento. En una publicación de la Corporación Tiempo 2000 - el tanque de pensamiento de la Concertación - la proyección numérica de los resultados de las elec-

ciones municipales daría una cifra de entre 10 y 12 parlamentarios para el PS y el PPD juntos.

En todo caso, se dice que la DC valora la presencia socialista pues es un partido social, con presencia efectiva en sectores sindicales y poblacionales a diferencia del PPD, que es visualizado más como un partido de opinión.

Pese a que Frei ha dado al PS muestras de su espíritu concertacionista, en la izquierda socialista se desconfiaba de parte importante de su equipo, en donde percibe cierta inclinación a usar de una manera mucho más autónoma el mayor peso orgánico ante situaciones de crisis.

Los expertos electorales vaticinan que en general el gobierno podría aumentar su representación parlamentaria pero que no alcanzará los dos tercios en ninguna de ambas cámaras. Estabilidad pareciera ser la tendencia. Se estima que en la Cámara de Diputados la Concertación puede aumentar sus 72 cupos, pero no más allá de los 76 ó 78, es decir, no alcanzaría los dos tercios (80) para las reformas constitucionales que permitan dismantelar el tutelaje autoritario. Del otro lado, se cree que la oposición de derecha puede aumentar de 48 a 52 sus diputados, mientras en el Senado ambas fuerzas tienden a mantenerse. En esta rama legislativa, siempre según los expertos electorales, es poco probable que la alianza oficialista suba su representación de 22 a 24, cifra esta última que le daría el quórum para las anheladas reformas constitucionales. Otra constatación es que las competencias más significativas serán al interior de los propios pactos, entre candidatos de distinto partido, pues ellas decidirán el tamaño relativo de cada agrupación y el liderazgo durante el próximo gobierno, cuya duración aún es una incógnita pues no se ha logrado acuerdo para reducir el período presidencial que la Constitución fijó en ocho años, con la sola excepción de la etapa de transición de cuatro años, que termina el 11 de marzo de 1994.

El entorno de la competencia tiende también a la estabilidad, pues si se observan los principales indicadores económicos, las buenas expectativas no van a variar de aquí a la elección. La inflación oscilará entre el 10 y 12 por ciento, la desocupación entre 4,8 y 5 por ciento y el crecimiento del Producto Interno Bruto bordeará el 5 por ciento, auguran las cifras de la macroeconomía. El tema económico, entonces, no plantea grandes discusiones y sólo el tema militar y los derechos humanos introducen la incertidumbre en el mapa electoral. Aunque hasta el cierre de esta edición los candidatos no presentaban programas estructurales de Gobierno la propuesta freísta se resumía en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la infra-

estructura del país, la modernización del Estado y la preocupación por el medio ambiente.

Los dilemas de la derecha

En este esquema de triunfo y seguridad de la Concertación el análisis de la derecha, en tanto, muestra el afianzamiento de los sectores más conservadores frente a la derecha más liberal encabezada por el presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand. La candidatura de Alessandri representa el triunfo de los poderes fácticos por sobre aquella idea de ordenar una derecha política capaz de competir en la estructura institucional democrática con la Concertación. Tanto la composición de su comando de base familiar y empresarial y con débil capacidad de decisión de los partidos como el alejamiento de los planteamientos orgánicos sobre gobierno y política, hacen pensar en una derecha que se organiza y estructura en torno a intereses corporativos y que pese a su crisis tiene aún capacidad de generar «ruido».

Ello hará que en los próximos meses y hasta marzo, cuando se instale el nuevo gobierno, se asista a un forcejeo para imponer vetos corporativos al futuro gobierno, tanto en temas programáticos como en su composición. En este proceso tendrá una fuerte influencia la visión más optimista sobre su poder político que después de los sucesos de septiembre tiene el Ejército. Esto puede ser una cuña al interior de la Concertación en la medida que el equipo democristiano del candidato tiene una mayor cercanía con sectores empresariales. A ello hay que sumar que los medios de comunicación de la derecha han sincronizado una campaña orientada a presentar como agotada la Concertación por la actitud díscola de los socialistas.

Además, es evidente que la apuesta política fundamental de la derecha está en el plano parlamentario, a partir del cual esperan un poder mayor y más articulado en el próximo período. De hecho, no se descarta la presidencia del Senado para un representante de ese sector a partir de un ejercicio más desinhibido de los senadores designados que le otorgan mayoría a la derecha en esta rama del congreso. La repercusión más inmediata de este hecho sería el cambio en el Consejo de Seguridad Nacional en el cual el presidente del Senado participa como miembro pleno.

Las tareas a futuro de la segunda Concertación

La estrategia del Gobierno de la Concertación durante la transición se orientó a lograr acuerdos parciales que viabilizaran reformas graduales para permitir la estabilidad del proceso de transición, y un clima de confianza entre los agentes económi-

cos. El carácter gradual y pautado del proceso de transición chileno ha determinado que las tareas de profundización y consolidación de la democracia se desarrollen en un período de tiempo más o menos prolongado. Iniciado antes de la llegada al Gobierno de las fuerzas de la Concertación, tiene varios de sus logros más importantes durante esta gestión, pero tareas importantes marcarán al gobierno siguiente.

Las principales tareas de la transición implicaron tres clases de objetivos: reformas político-institucionales, subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles y establecimiento de la verdad y la justicia en las violaciones a los derechos humanos. A estos tres objetivos, que no pudieron ser abarcados en su totalidad se agregan hacia el futuro otras tareas democráticas fuertemente interrelacionadas: la modernización político institucional del Estado que incluya cambios en el régimen político para asegurar su estabilidad. Se trata de ir de un binominalismo mayoritario hacia un sistema proporcional con un congreso de origen exclusivamente electivo. También se aspira al afianzamiento de un liderazgo civil sobre los temas de la defensa nacional y la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil.

A estos dos objetivos se suma la reforma del Estado para la eficiencia y eficacia de la administración en cuanto a la calidad de su gestión y el establecimiento de sus bases éticas de funcionamiento como fundamento de una cultura democrática. Para plasmar en la realidad estas tareas, la nueva coalición concertacionista debe funcionar, aseguran los analistas de la alianza oficialista, como una estructura de acuerdos políticos de consenso, con sistemas de mayoría y sobre ciertos supuestos. Ello supone la existencia de un conjunto de acuerdos sustanciales sobre las metas políticas de la coalición, además de criterios y mecanismos para resolver las controversias y conflictos que se susciten en su interior. Debe institucionalizarse un tipo de consulta política sobre temas de orientación gubernamental que cultive «medidas de confianza mutua» entre los partidos de la coalición, aseguran socialistas y demócratas cristianos, que a fines de septiembre afiataron las bases del «nuevo pacto de gobernalidad».

Según explicó el presidente del Partido Socialista, Germán Correa, la idea es que en octubre la Concertación realice un acto simbólico y «de compromiso futuro» de los grandes aliados «en las grandes tareas y desafíos que se avecinan si Frei logra la Presidencia». El presidente de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez señaló, por su parte, que la rica experiencia vivida en la coalición permite lanzar la Concertación hacia un futuro «que se plantea promisorio y que debemos hacer realidad con un eficaz gobierno presidido por Eduardo Frei».

Concientes de que vienen «nuevos tiempos» los partidos más importantes de la alianza reconciliaron los «dos mundos» que conviven en la multipartidaria, después de las diferencias surgidas por los problemas en torno a los derechos humanos. Para Correa, al menos, la Concertación «es la única alianza política con capacidad de generar una mayoría social y política que permita tener la fuerza de llevar a cabo un proyecto progresista de país».

De los resultados de diciembre, dependerá en gran medida que los objetivos se cumplan. Si la Concertación por la Democracia no logra los difíciles dos tercios en el Parlamento, su segundo gobierno se verá tentado a pactar hacia la centroderecha, con el previsible desgajamiento del socialismo, vaticinan los analistas. Pero ello ya es materia de un análisis sobre el próximo Gobierno que deberá, fundamentalmente, completar la transición y saldar las deudas pendientes que dejará la administración Aylwin, sobre todo en materia de derechos humanos.

Santiago, septiembre de 1993